



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

Facultad de Derecho y Ciencias Humanas

Derecho

Programa Especial de Titulación

Análisis de la pertinencia de la propuesta de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma
Política referida a la inmunidad parlamentaria presentada el año 2019

Rivin Yakov Yangali Quintanilla

Para optar por el Título Profesional de Abogado

Asesor: Ernesto Lechuga Pino

Lima – Perú

2021

DEDICATORIA

Para Lucía Abril, como siempre

RESUMEN

El presente trabajo de investigación trata de abordar el debate que continuamente se genera entorno a la excepción con la que cuentan los parlamentarios frente al marco normativo peruano, el cual les permite gozar del no juzgamiento ni arresto en el uso de la función legislativa; es decir, la inmunidad parlamentaria.

Es así, que en el primer capítulo se aborda la manera en cómo se concibe la inmunidad parlamentaria y las diversas aproximaciones teóricas y definiciones que entorno a ella surgieron. Es preciso también, diferenciar el antejudio político de inmunidad parlamentaria, puesto que en la práctica ambos mecanismos han sido considerados iguales. En el segundo capítulo se desarrollará la manera en la que se contempló este instrumento de protección en las diversas Constituciones, las cuales se identifican que fueron fruto de una agitada pugna entre los líderes peruanos por la obtención del poder político. Por tercer capítulo, se realiza una comparación de la inmunidad parlamentaria con el resto de países para analizar las experiencias de aquellos que cuentan o no con este instrumento y ver la relevancia de un tercer actor en la revisión del levantamiento de inmunidad. Teniendo en cuenta ello, se puede precisar en el cuarto capítulo la transcendencia del Poder Judicial en el inicio de la vida republicana del Perú, pues esta entidad tenía el rol de realizar el juicio de residencia, un evento importante porque era el juzgamiento de los altos funcionarios. Actualmente la figura de esta institución es relegada por el resto de poderes del Estado

quienes deciden sobre los mecanismos de juzgamiento. Por último, como quinto capítulo se aborda la propuesta de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, en específico la planteada sobre inmunidad parlamentaria, donde se establece cambios sustanciales sobre el órgano ejecutor del levantamiento de inmunidad.

ÍNDICE

ÍNDICE

DEDICATORIA

RESUMEN

INTRODUCCIÓN.....I

CAPÍTULO I.....1

APROXIMACIONES TEÓRICAS ACERCA DE LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA.....1

1.1 Hacia una definición conceptual de la inmunidad parlamentaria

1.2 Orígenes y evolución de la inmunidad parlamentaria

1.3 Inmunidad parlamentaria y el Antejuiicio Político: Diferencias

CAPÍTULO II

PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA EN EL PERÚ

2.1 La Constitución Política de la República Peruana de 1823

2.2 La Constitución Política de la República Peruana de 1826

2.3 La Constitución Política de la República Peruana de 1828

2.4 La Constitución Política de la República Peruana de 1834

2.5 La Constitución Política de la República Peruana de 1856

2.6 La Constitución Política de la República Peruana de 1860

2.7 La Constitución Política de la República Peruana de 1867

2.8 La Constitución Política de la República Peruana de 1920

2.9 La Constitución Política de la República Peruana de 1933

2.10 La Constitución Política de la República Peruana de 1979

2.11 La Constitución Política de la República Peruana de 1993

CAPÍTULO III

LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA EN EL DERECHO COMPARADO

LATINOAMERICANO

3.1 Inmunidad parlamentaria en Argentina

3.2 Inmunidad parlamentaria en Brasil

3.3 Inmunidad parlamentaria en Chile

3.4 Inmunidad parlamentaria en Colombia

3.5 Inmunidad parlamentaria en Uruguay

3.6 Inmunidad parlamentaria en Guatemala

3.7 Inmunidad parlamentaria en Nicaragua

3.8 Inmunidad parlamentaria en Venezuela

CAPÍTULO IV

ROL DEL PODER JUDICIAL EN LA EVALUACIÓN DEL FUERO DE OTROS PODERES
DEL ESTADO A LO LARGO DE LA HISTORIA CONSTITUCIONAL PERUANA

CAPÍTULO V

ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE ALTO NIVEL PARA LA
REFORMA POLÍTICA REFERIDA A LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

INTRODUCCIÓN

El país ha transitado por varios momentos en los que su clase política se ha puesto en seria situación de desprestigio. Probablemente, en los últimos tiempos este problema ha tenido sus hitos más altos a raíz de los audios que comprometieron el entorno del Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura y los casos de corrupción vinculados a la empresa Odebrecht, los mismos que fueron develados entre los años 2015 y 2018. Pero también han contribuido a ese desprestigio, los cuestionables comportamientos individuales y colectivos de los congresistas y los grupos parlamentarios que conforman el Parlamento y las situaciones de crisis que condujeron al proceso de sucesión constitucional que significó la asunción del poder por parte del Presidente Martín Vizcarra.

Todo lo descrito supone, desde nuestro punto de vista, un escenario de crisis de representación. Al tener liderazgos políticos deslegitimados se pone en serio riesgo también nuestro esquema de democracia representativa.

Ante esa situación, el gobierno peruano, mediante la Resolución Suprema N° 228-2018-PCM publicada en el diario oficial El Peruano el 21 de diciembre de 2018, creó la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, con la finalidad de preparar una propuesta que luego sería puesta a consideración del Congreso de la República para su debate y aprobación si fuera el caso.

Esta Comisión presentó una propuesta denominada “Hacia la democracia del Bicentenario” en la que se plantean los siguientes cuatro grandes objetivos para una reforma política:

- Para tener partidos políticos y organizaciones políticas regionales más fuertes y representativos.
- Para combatir la corrupción y fomentar la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
- Para tener una democracia más gobernable y con mejor control político.
- Para tener una mayor y mejor participación electoral y política de la ciudadanía.

Para efectos del presente trabajo de investigación, nosotros vamos a centrarnos en el eje 2 referido a la lucha contra la corrupción y al fomento de la rendición de cuentas ante la ciudadanía. Y de manera más específica aún, a la parte referida al tratamiento de la inmunidad parlamentaria. Hacemos esta precisión porque en dicho eje también se consigan planteamientos referidos a la regulación del financiamiento político y otras medidas orientadas a mejorar los mecanismos de transparencia en la representación.

En el señalado segundo eje de la propuesta de reforma política, en lo referido a la inmunidad parlamentaria, la Comisión de Alto Nivel ha sugerido la siguiente medida específica:

- Precisar alcances de la prerrogativa constitucional de inmunidad que tienen los parlamentarios y establecer la competencia de la Corte Suprema de Justicia para evaluar la ausencia de persecución política en las denuncias penales que afronten.

Nuestra investigación estará orientada al análisis y evaluación de la pertinencia o no del planteamiento específico de la Comisión que señala que le corresponde a la Corte Suprema la facultad de levantar el fuero a los legisladores. Para ello, utilizaremos elementos del derecho comparado y de nuestra propia tradición constitucional. También,

por supuesto, de los presupuestos que modelan nuestra actual arquitectura constitucional y nuestro sistema de gobierno. Los elementos que podamos obtener de los hechos políticos que ha signado nuestra historia republicana reciente también serán muy pertinentes y, por supuesto, el contexto histórico en el que la institución de la inmunidad parlamentaria fue tratada en las diversas Constituciones del Perú.

A lo largo de la investigación también podremos ir analizando el rol que, en nuestra historia constitucional, ha tenido el Poder Judicial (y más específicamente la Corte Suprema), en la evaluación del fuero de representantes de otros poderes del Estado (desde el llamado Juicio de Residencia hasta la actual propuesta de la Comisión de Reforma Política de otorgarle la potestad de levantar el fuero parlamentario).

Creemos profundamente que el país se encuentra en un momento especial de su historia, más aún teniendo tan cerca la Conmemoración de nuestro Bicentenario como República independiente. Por ello, urgen medidas que ayuden a corregir nuestros esquemas de representación política a fin de recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones públicas. Sin embargo, es cierto también que el plazo otorgado a la Comisión Tuesta para una misión de tan gran envergadura no ha sido el suficiente y, menos aún, que dicha propuesta haya tenido la discusión suficiente sobre todo a nivel de la ciudadanía para abordar como corresponde su complejidad y su pertinencia.

Por ello, a pesar de existir estudios en el Perú sobre la inmunidad parlamentaria y sus implicancias, como los realizados por los doctores Gustavo Gutiérrez Ticse, Aníbal Vásquez Ríos, Patricia Durand Vásquez, entre otros (y que fueron consultados para el presente trabajo), creemos que nuestra investigación puede constituir un modesto aporte al ubicarse en el contexto específico de la grave crisis de representación por el que el país atraviesa y en la discusión presente de la pertinencia de las instituciones jurídico políticas que legitiman y le dan sustento a nuestra democracia. La inmunidad parlamentaria es, en este sentido, una de las más importantes y una de las que más cuestionamientos ha

recibido al punto de haber sido objeto de una reforma constitucional recientemente aprobada. Sin embargo, consideramos que dicha reforma no agota ni el escrutinio público ni el especializado pues con el advenimiento de un nuevo gobierno y una nueva representación parlamentaria y con una ciudadanía aún impaciente por constatar cambios sustantivos que mejoren su vínculo con sus representantes seguramente se pondrá de nuevo en el tapete de la discusión pública la inmunidad parlamentaria, sus alcances y sus implicancias.

CAPÍTULO I

APROXIMACIONES TEÓRICAS ACERCA DE LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA

1.1 Hacia una Definición Conceptual de la Inmunidad Parlamentaria

En las siguientes líneas veremos algunas definiciones del concepto de Inmunidad Parlamentaria. Jorge Luis (Meléndez Saénz), citando parte del artículo 93° de la actual Constitución Política del Perú, señala textualmente que:

«La inmunidad parlamentaria puede ser entendida como una garantía procesal penal de carácter político de la que son titulares los cuerpos legislativos de un Estado a favor de sus miembros, de tal forma que éstos no puedan ser detenidos ni procesados penalmente (salvo flagrante delito) sin aprobación previa del Parlamento» (2012).

Esta prerrogativa es propia de la función legislativa, dado que su objeto es establecer medidas de prevención contra la persecución y el abuso del poder con base estrictamente política de los demás poderes del Estado, que traten de alterar la conformación o el funcionamiento del Congreso. Asimismo, el autor menciona que la definición de Inmunidad se divide en dos, en relación al tipo de protección que se puede brindar al parlamentario; la primera es la **inmunidad en el sentido estricto**, que concierne a la protección brindada para evitar el procesamiento penal directo por las circunstancias que no son realizados en ejercicio de su función como parlamentarios, la cual inicia desde el día de su elección hasta

el término de su periodo legislativo. La segunda, la denomina **inviolabilidad**, la cual consiste en proteger toda expresión realizada por el legislador, es decir, la prerrogativa libre de cargo penal por el cumplimiento de sus funciones (2012).

Siguiendo la misma línea, Sofía Cordero Molina quien realiza un estudio sobre cómo se encuentran reguladas las prerrogativas parlamentarias en el ordenamiento jurídico costarricense sostiene que:

«En el amplio sentido, el concepto de Inmunidad Parlamentaria debe ser entendido como los privilegios otorgados constitucionalmente a favor de los Diputados, en carácter de representantes del pueblo, con el propósito de preservar la voz de la ciudadanía y facilitar el cumplimiento de los demás deberes propios de la función legislativa». (Cordero Molina , 2019),

Al igual que el anterior autor, menciona que estas prerrogativas se definen bajo dos sentidos: la primera es la «Irresponsabilidad Parlamentaria», cuya finalidad es la protección de la autonomía de expresión; la segunda, nos habla de la Inviolabilidad Parlamentaria que protege la libertad «corporal del Diputado», donde se brinda el privilegio de protección a los hechos realizados que no competen dentro de las funciones legislativas (2019).

Por otro lado, tenemos el estudio realizado por (Latorre Boza), quien también sostiene que esta prerrogativa parlamentaria se entiende en dos acepciones, una de manera amplia y la otra de modo estricto; la primera, es la Inviolabilidad que se entiende como los derechos inherente a la condición parlamentaria que se le confiere a los representantes de la población (congresistas) contra acciones judiciales que pueden ser promovidas por el gobierno de turno o grupos con intereses particulares, que puedan perjudicar a los funcionarios. La segunda, es la Inmunidad Parlamentaria que es entendida de manera estricta, el cual consiste en la protección de derechos que poseen los parlamentarios, ya que estos no podrán ser arrestados y tampoco se le levantará proceso sin el consentimiento

previo del Congreso, salvo que lo encuentre en situación de flagrancia. El autor hace hincapié en sostener lo siguiente:

«(...) La inmunidad es una autorización que, salvo el caso de flagrante delito, deberá emitir el Parlamento con carácter previo a todo arresto, detención o encauzamiento judicial que pudiera desembocar en privación de la libertad para el diputado (...) es simplemente una garantía formal, de tipo procesal» (Latorre Boza, 2008).

Por último, en el (Informe de Investigación 2018: La Inmunidad Parlamentaria en la Legislación Comparada), Patricia Durand Vásquez, precisa lo siguiente:

«La inmunidad parlamentaria (...) entendida como una garantía que la Constitución Política otorga al Parlamento como institución y a sus miembros de manera individual, a efectos de salvaguardar su independencia, el libre y normal accionar en el desempeño de su misión constitucional, su seguridad y jerarquía».

Los cuatro autores citados en esta parte de la investigación contribuyen a definir el concepto de Inmunidad Parlamentaria, por lo que se entiende que es un instrumento de protección a favor del congresista para que puedan desempeñar de la manera más óptima sus labores parlamentarias en calidad de representantes de la población, puesto que estamos en un sistema democrático representativo en el cual los parlamentarios como representantes hacen llegar las demandas y necesidades de la población. Así, la inmunidad parlamentaria funciona como un elemento de contrapeso ante los eventuales excesos de los otros poderes del Estado.

1.2 Orígenes y Evolución de la Institución de la Inmunidad Parlamentaria

Para empezar el estudio del mecanismo de la Inmunidad Parlamentaria, tenemos que remontarnos en la historia del nacimiento del Parlamento Inglés; ya que este instrumento

nace como necesidad de protección ante un contexto de disputas constantes entre el Parlamento y Rey de Inglaterra. Como sostiene uno de los máximos exponentes del estudio el Derecho Hans Kelsen:

«La Institución de la Inmunidad Parlamentaria tuvo en su origen el sentido de una protección del Parlamento contra los obstáculos que a su actividad podían provenir de parte del monarca o de su gobierno» (2019).

Los factores que produjeron esta lucha por limitar el poder político del monarca, se desarrollaron bajo el reinado de Juan Sin Tierra (1199-1216), pues este Rey se gana la enemistad de los nobles, por conflictos externos como el enfrentar a Felipe II de Francia donde perdió Normandía, además de los conflictos internos como la imposición de impuesto a los nobles y el enfrentamiento con la Iglesia.

El Rey se vio obligado a firmar **La Carta Magna** en 1215, aceptando los 63 artículos que tendrían trascendentales consecuencias para el sistema monárquico inglés, pues insipientemente se estableció elementos básicos del sistema democrático. Uno de los aspectos más relevantes de este documento fue el reconocimiento del Consejo del Reino (una versión inicial del Parlamento, cuya atribución era aprobar el apoyo financiero al monarca), pero también lo fueron el principio de Consentimiento General (lo que afecta a todos deber ser elegido por todos), el Principio de Autoridad Legítima y el Debido Proceso de los miembros del parlamento (juzgados por sus pares). Todas estas instituciones asoman como precursoras de nuestro actual sistema de representación.

Básicamente, la Carta Magna es el antepasado más remoto de las constituciones modernas de las libertades individuales, puesto que el objetivo fundamental de este manuscrito es defender los intereses de los señores feudales frente al poder absorbente de la corona. Estas libertades van a limitar el poder político del Rey en beneficio de los miembros del alto clero. El Rey queda sujeto a las normas establecidas en la Magna Carta

demostrando así que la ley está por encima de todos, incluso del Rey. No obstante, la independencia de los primeros parlamentarios fue precaria, es por ello que era «necesaria la formalización de ciertas prerrogativas en contraposición de una monarquía arbitraria y poderosa» (Cordero Molina , 2019).

Cabe precisar, que los hitos importantes que propiciaron **la consolidación del mecanismo de la Inmunidad Parlamentaria** fueron producto de la ambición por obtener mayores privilegios, ya que algunos miembros del Parlamento (cámara de los comunes) no gozaban de los mismos beneficios de la cámara de los lores, puesto que los estamentos más privilegiados han sido el alto clero y los señores feudales, quienes mantuvieron ciertos privilegios. Estos conformaron la Cámara alta, a diferencia de la Cámara baja, quienes eran parte del “Tercer Estado” este estamento llano que no gozaba de los mismos privilegios, era considerado el estamento débil; éste se vio inmerso en pugnas continuas con la corona para alcanzar el status deseado, mediante la ley que sujeta al rey a reconocer ciertos derechos de los miembros del Parlamento (Carro Martínez, 1986).

En 1541 se reclama la petición de la palabra por parte del cuerpo legislativo del Parlamento inglés que representaban a la Cámara baja y en 1544 se exige la inviolabilidad de los miembros del Parlamento. Cabe destacar, que es recién en **1689** donde las primeras prerrogativas parlamentarias se concretaron en el manuscrito de Declaración de Derechos más conocida como la **Bill of Rights**; no obstante, en sus inicios esta prerrogativa solo cubría el impedimento de arresto, que funcionaba como garantía para que los parlamentarios pudieran viajar desde sus domicilios hasta la sede del parlamento sin ser molestados ni detenidos, de esta manera puedan desempeñar libremente sus labores y regresar con bien a sus hogares. Posteriormente, el Parlamento fue conquistando un mayor ámbito de protección de sus derechos como parlamentarios. (Cordero Molina , 2019). Cabe resaltar, que el **Bill of Rights** es un documento sumamente importante, dado que consolida la limitación del poder absoluto del rey, pues se establece el imperio de la ley que está por

encima de todo. Por ende, es el parlamento inglés el único representante de la población inglesa, ya que el poder político recae en la nación (Cordero Molina, 2019).

Como vemos, el instrumento de protección de Inmunidad Parlamentaria nace y se configura en el antiguo régimen de Inglaterra, inicialmente incipiente desde 1215 con la firma de la Carta Magna que es la matriz donde se configura las primeras reglas para proteger la vulneración de los individuos del parlamento como por ejemplo los impuestos excesivos y castigos ilegales; y en 1689 se fortalecen estos derechos con la Bill of Rights, donde el poder del monarca es débil, y parlamento como primer poder del Estado, quien designa a los reyes como es el caso de la designación de Guillermo de Orange y María. En ese contexto Fernández-Miranda Campoamor señala lo siguiente:

«El fundamento de la inmunidad parlamentaria como prerrogativa, nace con la necesidad de garantizar la independencia del Parlamento frente al resto de los poderes que responde a un postulado racionalista de organización del poder y es instrumentos de soberanía para un órgano» (Fernández-Miranda Campoamor).

A contraparte, Gustavo (Gutiérrez Ticse, 2016) no le atribuye gran importancia a la pugna por el poder político entre la corona y el Parlamento inglés, y señala que:

«La doctrina dice que la inmunidad apareció en el derecho inglés. Para nosotros, esa es una media verdad. (...). Uno de estos privilegios era la gracia monárquica de cubrir con un manto que imposibilitaba su detención a quienes concurrían a la asamblea denominada Parlamento, esta era la inmunidad parlamentaria desde el derecho inglés».

Cabe anotar que, para este autor, no sólo se configuró este instrumento en Inglaterra sino también en España; de esta manera, se reduce al Parlamento inglés como una suerte de un grupo de señores feudales que son el apoyo de la monarquía, ya que este grupo

contribuía con el pago de impuestos para el sostenimiento de la corona y es por ello que el rey convivía con ellos. Asimismo, cabe resaltar la diferencia que establece entre la inmunidad parlamentaria inglesa con la inmunidad del Estado Liberal (2016). Es decir, para Gutiérrez, el parlamento era sumamente débil, ya que el parlamento adquirió mayor autonomía recién con la Revolución Gloriosa, que terminó con el derrocamiento del monarca Jacobo II. Y de tal modo sucede con Francia, país que fue protagonista de la madre de las revoluciones, es decir, la Revolución francesa que dio en el año 1789, que rompió con la estructura del antiguo régimen. Siguiendo la misma línea, Manuel Abellan citado por Yimy Reynaga Alvarado»(2016) sostiene que el origen moderno de las garantías parlamentarias tuvo lugar en Francia en 1789, ya que se da una coexistencia del antiguo régimen y sus instituciones con las nuevas instituciones surgidas a consecuencia de la dinámica de la Revolución, donde el nuevo parlamento con representantes revolucionarios tienen una ideología diferente y amenazante a los rezagos del sistema caduco, que es muestra del sistema monárquico. Pero lo que implicaba la necesidad de estas prerrogativas frente a cualquier represalia contra los parlamentarios. En esta línea señala Gutiérrez:

«La Inmunidad parlamentaria nació con la Revolución francesa, con la fundación de un nuevo modelo de Estado; (...) Es este el punto de quiebre de las formaciones estadales, ya que, en el nuevo modelo liberal, le da realce el termino liberal en el buen sentido de la palabra: Liberal como liberación de ese modelo absolutista que impedía la libertad, la igualdad y todos los derechos por los que hoy todos exigimos un modelo más racional»

Cabe destacar, lo señalado por (Fernandez-Miranda Campoamor), quien menciona que para poder entender esta prerrogativa e incluso comprender la teoría de la separación de poderes del Estado y el fortalecimiento del Parlamento; no solo es necesario exponer la definición de los términos o en qué consistieron cada una de ellas, sino también graficar el contexto histórico, social y político en la cual nacieron o estuvieron vigentes. Puesto que,

es de suma importancia comprender el trasfondo y no solo la forma de los cambios en el aspecto ideológico, político y jurídico entre el sistema político que se estaba instaurando después de la revolución y sobre todo de la consolidación de los nuevos poderes que desplazaban a las instituciones y sus funciones del antiguo régimen de Francia. Ya que desempeñó un papel importante en la «confluencia de las doctrinas de la división de poderes» (Fernandez-Miranda Campoamor). No obstante, no se puede negar el gran avance de las prerrogativas parlamentarias en Inglaterra, ya que en este país fue un proceso largo y acumulativo que atravesó el parlamento inglés para obtener la inmunidad parlamentaria y por medio de la ley limitar el poder político del Rey. Puesto que, la razón de ser de este mecanismo de protección de la función legislativa es garantizar a los parlamentarios un ambiente óptimo para hacer sus funciones como la Ley lo estipula. Ya que se tiene que proteger al órgano legislativo en su conjunto, del abuso del poder político del monarca o de quién ostente el poder Ejecutivo; asimismo, es considerada como el Instrumento Constitucional que posee el cuerpo legislativo para proteger su función esencial de parlamentarios.

1.3 La Inmunidad Parlamentaria y el Antejuiicio Político: Diferencias

Ahora bien, ya habiendo establecido la definición conceptual de la inmunidad parlamentaria y qué se entiende por ello y habiendo establecido también como se originó y fue evolucionando a lo largo de la historia, es importante hacer un ejercicio de distinción entre lo que es la inmunidad parlamentaria y el antejuiicio político. Ante ello, se debe buscar las principales diferencias para evitar concurrir en una confusión, por lo que se delimitará ambos mecanismos de regulación.

Uno de los primeros elementos al que se debe recurrir para marcar la primera diferenciación es la Constitución, la misma que en el Capítulo I del Poder Legislativo en su art. 93, dice sobre la inmunidad parlamentaria:

«Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones.

No pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente(..)».(Constitución Política del Perú , 1993)

Este artículo tiene como finalidad que se imposibilite procesos judiciales (denuncias o arrestos) hacia los parlamentarios, sin una previa autorización de este poder del Estado, como es el Congreso de la República, ya que el parlamentario al tener un cargo tan relevante como ese, tiene como función hacer toma de decisiones que afecten a sectores de intereses particulares y por consiguiente si estos sectores no están conformes con las acciones impuestas, pueden realizar ciertos actos que contravenga la buena fe y hacer que resulten incriminados para alterar las funciones del legislador. Claro está, que se debe entender que esto no va a contravenir a la autorización, si el hecho es un acto criminal, pues siempre se debe respetar la idoneidad del parlamento.

Además, realizando una reflexión sobre la importancia de la inmunidad parlamentaria, otro aspecto relevante que otorga esta medida al Congreso es que le da mayor independencia, puesto que asume la potestad de decidir sobre el juzgamiento o no de uno de sus miembros, esto debido a que los representantes legislativos deben contar con un grado de seguridad para ejercer sus cargos.

Ahora bien, si hacemos referencia al antejuicio político, esta al ser distinto de la inmunidad parlamentaria, está situada y explicada en un artículo aparte de nuestra Carta Política y para ser más precisos, en el Capítulo I del Poder Legislativo en su art. 99, la misma que señala:

“Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal Constitucional; a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas.” (Constitución Política del Perú , 1993)

En comparación con la Inmunidad que consiste en que no se puede procesar a los parlamentarios; el antejuicio político no permite que los parlamentarios sean procesados por la ejecución de sus funciones por los órganos de justicia convencionales, muy por el contrario consiste en la formulación desde el propio poder legislativo para una acusación constitucional en contraposición de uno de los integrantes del cuerpo legislativo; sin embargo dicha figura del antejuicio político en el Perú no tenía esa concepción desde sus inicios, debido a que como menciona (Gustavo Gutiérrez - Ticse, 2009) en las Constituciones de 1828 y la de 1979; en la primera, se encontraba ya una pena impuesta, la cual años después establecería la “Ley de responsabilidad de funcionarios públicos” y en la segunda era tratado como una intervención de corte político y solo constaba en una formalización de una denuncia que no iba más allá de eso, pues el poder que emitía justicia mantenía dicha potestad.

No obstante, nuestra actual Constitución contempla que tanto el Ministerio Público y el Poder Judicial no pueden procesar a los parlamentarios por las acusaciones constitucionales formulados por el Congreso, ya que es una función inherente a este órgano legislativo. Por tanto, hay capacidad de inhabilitación de funciones a aquellos miembros que sean encontrados culpables.

Cabe precisar que otro elemento normativo a revisar es el Reglamento del Congreso de la República, en donde además establecen los procedimientos de ejecución de la inmunidad parlamentaria y el antejuicio político, lo cual nos reafirma las diferencias y contribuye a una mayor precisión. Las causales para un antejuicio que se instituye se encuentran en el Procedimiento de Acusación Constitucional en su artículo 89°

«Que la persona que formula la denuncia sea agraviada por los hechos o conductas que se denuncian.

Que se refieran a hechos que constituyan infracción de la Constitución y/o delitos de función previstos en la legislación penal». (Reglamento del Congreso de la República, 2016)

Con lo cual solo lo circunscribe a los actos de funciones del legislador o que contravenga a la Constitución, esto es dado con la finalidad de que se promueva el respeto y eficacia del ordenamiento jurídico y para prevenir que tampoco se dé un abuso de poder por parte de los parlamentarios, pues en la norma jurisdiccional peruana se vela por el principio de legalidad.

Por otro lado, respecto a la inmunidad parlamentaria su causal va relacionada a otros aspectos, como se precisa en el Capítulo II del Estatuto de los Congresistas: Inmunidades de Arresto y Proceso del inciso 2:

«La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria evalúa los actuados y determina que solo exista motivación de carácter legal y no de índole política, racial, religiosa o de otra naturaleza discriminatoria». (Reglamento del Congreso de la República, 2016)

Por ende, se trata de evitar que los juicios si no tienen una acusación fundamentada se entendería como una obstaculización de las funciones llevadas por motivaciones políticas. Pero un detalle importante que se debe tener en cuenta es que ello no impide que el

Ministerio Público pueda iniciar investigaciones preliminares sobre algún delito cometido por el legislador o que no se incluya las denuncias formuladas mucho antes de asumir la responsabilidad de parlamentario.

Es así que los actores políticos que son tomados en cuenta para la inmunidad parlamentaria, está compuesto por los Congresistas, los integrantes del Tribunal Constitucional y de la Defensoría del Pueblo; para el caso del antejuicio político, sumado a los ya mencionados, son tomados en cuenta un mayor número de funcionarios públicos de alto nivel, como: el Presidente, los Ministros de Estado, los integrantes del Concejo Nacional de la Magistratura, vocales de la Corte Suprema, Fiscales Supremos y el Contralor General.

Por tanto, esto no tiene que ser considerado como un favoritismo para solo este sector de altos funcionarios que se creería estarían por encima del ordenamiento jurídico, ya que recordando los primeros artículos de nuestra Carta Política, en la cual establece que todos somos iguales ante la ley; por lo que más bien debe ser considerado como todo lo contrario, puesto que la gran responsabilidad que asumen los legisladores es que se ponen en una situación de vulnerabilidad personal y como es de conocimiento público, las denuncias pueden realizarse de manera libre, ya que concierne al derecho de la persona ejercerlo si se siente vulnerado. Por tanto, el hecho de que los funcionarios estén expuestos al escrutinio público, estos deben contar con ciertos mecanismos que le permitan ejercer sus funciones con total plenitud en pro de emitir una opinión o voto calificado para todo el interés nacional.

Tal es así que la inmunidad parlamentaria concede al legislador el privilegio de no ser detenido o procesado penalmente sin que antes el poder legislativo haya dado una previa aprobación, distinto del antejuicio político que no pueden ser procesados penalmente sin que el Congreso haya realizado un proceso político jurisdiccional; además de tener en cuenta que las denuncias que reciben para el caso de la inmunidad parlamentaria es sobre

cualquier delito común, lo que lleva al parlamento peruano a tener una actuación de analizar si dicha denuncia o arresto no cuenta con motivaciones políticas; diferente del antejuicio político que resulta más específico, ya que las denuncias van relacionadas a temas de vulneración de la Constitución o aquellos delitos que fueron cometidos en el uso de sus funciones, esto genera que el Congreso tenga un desempeño de indagación y acusación en contra de uno de sus miembros.

Asimismo, otro punto de diferencia es los efectos que se generan al utilizar dichos mecanismos, puesto que inmunidad parlamentaria una vez resuelto el caso se emite si se levanta el fuero al parlamentario sea para la detención o procesamiento de juicio al parlamentario acusado y esto es decidido por el la mitad más uno del número legal de congresistas; y para el caso del antejuicio político, la comisión especial que se conforma considera si inhabilitan o destituyen al legislador, en la cual la decisión no debe ser decidido con la participación de la comisión permanente, sino con el cincuenta por ciento más uno del número legal de los miembros de dicha comisión.

Finalmente, otro aspecto a tomar en cuenta es la temporalidad con los que ambos cuentan, debido a que en el caso de este mecanismo de protección parlamentaria no se considera las denuncias formuladas un mes antes de asumir el cargo de parlamentario hasta un mes después de haber cesado en la función. Para lo que es el antejuicio político se considera desde la fecha que asume la función y tienen responsabilidad hasta cinco años posteriores del cese del cargo.

CAPÍTULO II

PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA EN EL PERÚ

Este capítulo desarrollará el análisis de la inmunidad parlamentaria peruana a través de nuestro tiempo republicano; por lo cual se acudirá como fuente primordial a las Constituciones. Como es de conocimiento público, nuestro país ha contado con diversas cartas magnas, las cuales quizá no han sido desarrolladas en su totalidad por la manera irrestricta con la que manejaron los actores políticos, pues ante ello se debe tener presente las circunstancias de ese entonces; esta comprensión contribuye a que no se desmerezca la lucha por encontrar la senda democrática y carácter constitucionalista con la que debe contar nuestra clase política y en específico los miembros del poder legislativo.

2.1 Constitución Política de la República Peruana – 1823:

Tratando de dejar los rezagos de ser una colonia española y con el ilusionismo de hacer nacer una república, se da origen a la Constitución Política de 1823 publicada por el entonces presidente José Bernardo de Tagle. Dicho texto fue realizado por el primer Congreso Constituyente elegidos por voto popular, esto tras haberse logrado nuestra independencia; por tanto, se debía empezar a diseñar las nuevas reglas que regirían nuestro ordenamiento jurídico. Como también explica (Fernán Altuve-Febres) el peligro de ataque del Ejército Realista hizo que el Estado Mayor del Ejército solicite al Congreso la designación de un Jefe de Estado que concentre el mando para la toma de decisiones

militares, esta situación contribuyó a una delimitación más clara del Poder Ejecutivo frente al Poder Legislativo. No obstante, dicha Constitución no rigió para entonces, debido a su corte liberal y a las características particulares del nuevo gobierno vitalicio que se instauraría por parte de Simón Bolívar, pero una vez culminado su mandato se restituyó la Constitución y rigió al menos por un año de los artículos tratados ahí tiene como esencia la protección del legislador, bajo la figura de la inmunidad parlamentaria, la cual se puede encontrar desde ese primer texto constitucional de 1823, en dicho documento todavía no se le conoce con ese término como tal, pero si se puede comprender de manera implícita la finalidad con la que se instituía, pues en su Capítulo III del Poder Legislativo, se menciona lo siguiente:

«Artículo 57. °. — Los Diputados son inviolables por sus opiniones, y jamás podrán ser reconvenidos ante la ley por las que hubieren manifestado en el tiempo del desempeño de su comisión.

Artículo 59. °. — En las acusaciones criminales contra los Diputados no entenderá otro juzgado ni tribunal que el Congreso, conforme a su reglamento interior; y mientras permanezcan las sesiones del Congreso no podrán ser demandados civilmente, ni ejecutados por deudas». (Congreso Constituyente de Perú, 1823)

Ambos artículos mencionan restricciones del órgano de justicia para intervenir en la esfera legislativa, por lo que analizando dicha Constitución se da en un contexto de crisis política, puesto que todavía quedaba los rezagos del colonialismo y el temor de represalias por el ejercicio del cargo legislativo era latente, ya que es recién en 1824 tras la batalla de Ayacucho en la Pampa de la Quinua donde se libra toda subyugación de España y ello se estipula en la Capitulación de Ayacucho, por lo que sería justificable establecer un trato diferenciado para los diputados de ese entonces y si ya se está dando el surgimiento de una república es razonable que en el cuerpo de la Constitución se refleje la separación de

poderes y tal sentido le daría la disposición de ser los mismos legisladores los que traten las acusaciones judiciales de sus miembros, evitando de este modo un control político sobre dicho organismo.

2.2 Constitución para la República Peruana de 1826:

Ahora bien, la segunda Carta Política con la que contó el Perú fue la promulgada en 1826 y tuvo una duración muy breve. Esta fue creada durante el gobierno del libertador Simón Bolívar; en ese documento constitucional se aprecia una marcada diferenciación respecto a su predecesora, pues la división de poderes del Estado ya no sería tres, sino se sumaría a ello el Poder Electoral; además, respecto al órgano legislativo pasaría de ser bicameral a tricameral, es decir, contaría con la Cámara de los Tribunales, Cámara de Senadores y Cámara de Censores, esta última de duración vitalicia, al igual que el puesto de Presidente de la Nación, asumida por Bolívar.

Por lo que, en la Constitución de 1826 en su Título V del Poder Legislativo en el que trata sobre la División, Atribuciones y Restricciones de este Poder

«Artículo 32°. — Ningún individuo del Cuerpo legislativo podrá ser preso durante su diputación sino por orden de su respectiva Cámara, a menos que sea sorprendido in fraganti en delito que merezca pena capital.

Artículo 33°. — Los miembros del Cuerpo legislativo serán inviolables por las opiniones que emitan dentro de sus Cámaras en el ejercicio de sus funciones».
(Congreso de la República, 1826)

Sin embargo, respecto al tema de inmunidad parlamentaria la esencia en sí no varía mucho, más que del término de diputado a disponer de más cámaras, pero que en detalle la de Censores, bajo ese tipo de régimen vitalicio prácticamente sí gozaría de una diferenciación de trato ante la ley, puesto que resultaría complicado juzgar el desempeño de estos, ya que el mecanismo que ayuda como indicador de un buen ejercicio de la función es volver

a ser elegido por voto, pero esta modalidad vitalicia vetaba dicho derecho del elector y más aún estaban protegidos de toda investigación; por ende, se puede decir que la inmunidad bajo esa condición si resultaría afectada y la concepción de esta prerrogativa se debería dar bajo las condiciones óptimas de legitimidad que obtienen los legisladores al momento de ser elegidos,

No es equivocado pensar que el Congreso en ciertos casos ha desnaturalizado la finalidad de la inmunidad parlamentaria, esto por un grado de irresponsabilidad de actores políticos que olvidan el espíritu cívico de llevar el cargo, como fue lo expuesto en la Constitución de 1826, estos hechos a veces deslegitiman el sentido de la inmunidad, pero estos actos no deben trascender más allá de una anécdota histórica del plan vitalicio que se quiso implementar; por lo que entendiendo ello, la naturaleza del legislador tendría verdaderamente un rol fiscalizador y promotor de las normas jurídicas, por lo que si era necesario que contara con un grado de protección que le permitiera ejercer a cabalidad sus funciones.

2.3 Constitución Política de la República Peruana de 1828:

En el análisis de esta Carta Política la estructura de todo el texto se marca distinciones respecto a las dos primeras, pues el Poder Legislativo de ser unicameral, luego tricameral, ahora sería bicameral siendo un punto intermedio y utilizando para ambas cámaras un procedimiento electoral. Este nuevo desarrollo de la Constitución hace que se dé un perfeccionamiento en el funcionamiento del legislativo. En lo que respecta a la inmunidad parlamentaria no hay mayor variación, pues continúa manteniendo su finalidad, como se observa en el texto constitucional, respecto a las Atribuciones Comunes de las Dos Cámaras en sus siguientes artículos:

«Artículo 42°. — Los Diputados y Senadores son inviolables por sus opiniones, (...).

Artículo 43°. — Mientras duren las sesiones del Congreso, no podrán los Diputados y Senadores ser demandados civilmente, ni ejecutados por deudas. En las acusaciones criminales contra algún miembro de las Cámaras, desde el día de su elección hasta dos meses después de haber cesado su cargo, no podrá procederse sino conforme al Artículo 31. (Congreso de la República, 1828)

Artículo 31. °. — Es atribución especial del Senado conocer si ha lugar a formación de causa en las acusaciones que haga la Cámara de Diputados, (...)».

Se comprende de estos artículos que se otorga a los congresistas la particularidad de no ser demandados porque es una garantía que responde a un carácter político de no afectación de sus funciones y tal es el caso que ahí se refleja la autonomía del órgano legislativo; como lo plasmaron los legisladores de ese entonces en su artículo 31 se procedimentaliza la acusación y hay una cantidad mínima de votos que se debe alcanzar para permitir que la demanda proceda y sin el cumplimiento de ello, resultaría en una ilegalidad y violación de la separación de poderes que goza el Congreso.

2.4 Constitución Política de la República Peruana de 1834:

El país a pesar de tener una corta independencia ya se estaba promulgando la cuarta Constitución, esto debido a los constantes enfrentamientos entre los actores políticos y un rol confrontacional con la que se presentaban las Fuerzas Armadas; por lo que dicha carta magna optó por tener limitaciones para el Poder Ejecutivo, como el hecho de no permitir su reelección inmediata, no poder nombrar a los integrantes de la Corte Suprema y jueces; tampoco podía observar la ley sin consentimiento del Consejo de Estado, entre otras limitaciones. En el punto específico sobre inmunidad parlamentaria en dicha sección, se menciona:

Artículo 45.º. — «Los Diputados y Senadores son inviolables, por sus opiniones, y en ningún tiempo pueden ser reconvenidos ante la ley, por las que hubieren manifestado en el desempeño de su comisión.

Artículo 46.º. — «Los Diputados y Senadores, mientras duren las sesiones, no pueden ser demandados civilmente ni ejecutados por deudas. En las acusaciones criminales contra algún miembro de las Cámaras, desde el día de su elección hasta el día en que se abra la legislatura, (...)». (Convención Nacional, 1834)

En estos artículos se encuentra que no solo será su tiempo de duración hasta un mes o dos meses después de acabado su periodo legislativo, sino que esta tiene que ser hasta que se instaure el siguiente Congreso; no obstante, es preciso señalar que en el artículo 23 es expuesto que tanto los integrantes de las cámaras, el Presidente de la Nación, los Ministros, entre otros altos funcionarios, si pueden ser acusados por las transgresiones de las normas perpetradas en ejercicio de su función y otros actos constitucionales, ya que concebían como un honor conformar parte de este cuerpo legislativo que aquellos actos que calcen los supuestos mencionados correspondían ser denunciados porque no se debía caer en la deshonra del Poder Legislativo.

2.5 Constitución Política de la República del Perú 1839 y de 1856:

La Carta Política de 1839 cuenta con más números de artículos, del 17 al 20, que desarrollan el tema de la inmunidad parlamentaria, desglosando punto por punto:

«Artículo 17. º. — Los Diputados y Senadores son inviolables por sus opiniones en el desempeño de su cargo.

Artículo 18. º. — Los Diputados y Senadores no pueden ser acusados o presos desde el día de su elección hasta tres meses después de concluidas las sesiones, sin previa autorización del Congreso, (...)

Artículo 20.º. — Ningún individuo del Cuerpo Legislativo podrá ser demandado civilmente ni ejecutado por deudas desde su elección hasta tres meses después de concluidas las sesiones». (Congreso General del Perú , 1839)

Para la Constitución de 1856 esta se reduce a dos artículos siendo más preciso y eliminando las represalias por deudas como se estipulaba en el texto anterior. Es así que se expone en dos artículos:

«Artículo 50.º. — Los Representantes son inviolables en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 51.º. — Los Representantes no pueden ser arrestados ni acusados durante las sesiones sin previa autorización del Congreso. Sólo en el caso de delito in fraganti podrán ser arrestados y se le pondrá inmediatamente a disposición del Congreso». (Convención Nacional, 1856)

La principal desvinculación entre ambas Constituciones resulta primero en que ya no se usa el término de diputados y senadores, el documento supremo de 1856 los menciona de manera general como “representantes”; el segundo punto es la temporalidad de inmunidad, puesto que en este último texto constitucional solo se menciona la permanencia de este privilegio durante las sesiones a diferencia de la Carta de 1839 quien menciona que dicho privilegio lo obtendrán desde el primer día de ser elegidos hasta tres meses del término de la sesión.

2.6 La Constitución Política del Perú de 1860

En la elaboración de esta Carta Política se demuestra que se da una respuesta conservadora a las reformas realizadas en la Carta Magna de 1856 (Liberal), uno de los temas primordiales en los cambios efectuados en esta Carta fue regular el vínculo entre el poder Ejecutivo y el Legislativo, fortaleciendo al Parlamento frente a un Ejecutivo que estaba limitado en sus funciones. Ya que entre las modificaciones el Congreso se

encargaría de elegir cargos al ejército, asimismo, los militares ya no podían ser parlamentarios hasta que no se retirasen. Además, el periodo presidencial se redujo de 6 a 4 años, y aún se mantiene la no reelección; también reapareció la figura del vicepresidente. Cabe resaltar, que una de las limitaciones que se impone al ejecutivo para salvaguardar al Parlamento de posibles actos en contra de este ente por parte del gobierno, fue establecer que se puede vacar al presidente no solo por muerte, sino también, por frustrar la reunión del Parlamento, así como disolverlo o detener su funcionamiento.

Teniendo un escenario adverso para la función parlamentaria y en especial para los parlamentarios de oposición, puesto que esta nueva Constitución se reducía al Parlamento de tal manera que queda subordinado al Ejecutivo. No obstante, las prerrogativas seguían vigente dentro de la Constitución de 1860; sin embargo, (Valle-Riestra) nos menciona que esta Constitución contempla una definición general respecto a la inviolabilidad, mencionado en el art. 54, donde además, se agrega reglamentos particulares sobre el mecanismo de protección legislativa, como se puede observar en los siguientes artículos:

«Artículo 54.- *Los diputados y senadores son inviolables en el desempeño de sus cargos»* (Congreso de la República, 1860).

Artículo 55.- *" Los diputados y senadores no podrán ser arrestados ni acusados, durante las sesiones sin previa autorización del Congreso, (...) excepto in fraganti delicto en cuyo caso serán puestos inmediatamente a disposición de su respectiva Cámara».* (Congreso de la República, 1860).

2.7 La Constitución Política del Perú de 1867

Es una de las constituciones que tuvo muy poca temporalidad, y se caracteriza por ser de corte liberal, como la Constitución de 1856 y de la misma manera, se empeñó en fortalecer las prerrogativas del Poder Legislativo, dejando relegado al Poder Ejecutivo; puesto que también, en esta etapa de nuestra historia Republicana se dieron constantes pugnas entre

ambos poderes del Estados. Un claro ejemplo, fue cuando el Parlamento aprobó una ley que prohibía al mandatario delegar responsabilidades con ministros censurados, dado que el presidente no aceptó la censura que se le hizo a uno de sus miembros del gabinete. Cabe precisar, que Javier (Valle-Riestra) sostiene que, con respecto a la protección parlamentaria que está estipulada en el **art. 53°** repite lo establecido en las anteriores cartas políticas; es decir, en palabras del autor «no dice nada nuevo». Asimismo, también se puede observar en el caso del **art. 54°** se menciona que:

«Los representantes no pueden ser acusados ni detenidos durante las sesiones, sin previa autorización del Congreso, salvo el caso de flagrante delito, en el cual serán puestos inmediatamente a disposición del Cuerpo legislativo» (Constitución Política del Perú de 1867).

No obstante, se puede apreciar una novedad en el **art. 55°**, donde determinar que los parlamentarios, no podrán ser arrestados ni denunciados, en el periodo de sesiones del Congreso, sin autorización previa del Supremo Tribunal de Justicia, a excepción de que estos padres de la patria sean encontrados en delito flagrante, de ser el caso serán puestos al orden de la Corte Suprema para el seguimiento de ley correspondiente”(Constitución Política del Perú de 1867). Aquí se puede ver claramente un antecedente singular de la participación del Poder Judicial en el levantamiento del fuero de los parlamentarios.

2.8 La Constitución para la República del Perú 1920

Esta Carta Política estuvo vigente alrededor de tres años, tiempo en el que se realizaron cambios políticos en el ámbito electoral como es el sufragio, puesto que este se habilitó para todos los peruanos en ejercicio, siempre y cuando estas personas sepan escribir y leer, como requisito fundamental; además, también se estipula que sean mayores de edad (21 años) o que cuenten con matrimonio.

Por otro lado, el Parlamento estaba compuesto por dos cámaras una de diputados y la otra de senadores; también, se restablece la duración de 5 años del periodo presidencial, con reelección inmediata. Con respecto a la Inmunidad Parlamentaria (Javier Valle- Riestra: Parlamentario, litigante y defensor de los derechos humanos), nos menciona que no tiene nada significativo sobre inviolabilidad e inmunidad, puesto que se repite lo señalado en el art. 54° de la Carta Política de 1867.

«Art. 80°.- Los Senadores y Diputados son inviolables en el ejercicio de sus funciones y no pueden ser acusados ni presos sin previa autorización de las Cámaras a que pertenezcan desde un mes antes de abrirse las sesiones hasta un mes después de cerradas; excepto infraganti delito, en cuyo caso serán puestos inmediatamente a disposición de su respectiva Cámara». (Constitución Política del Perú de 1920).

2.9 La Constitución Peruana de 1933

La Constitución de 1933 fue aprobada a inicios de abril de 1933 por el Presidente de la Nación Luis Sánchez Cerro. Cabe anotar, que esta Carta Magna es considerada de corte moderada, en esta también se incrementó el poder del Parlamento como se hizo en las Constituciones de 1856 y 1867 desfavoreciendo al poder Ejecutivo. Es preciso señalar, que esta Carta tuvo muchos avances en el ámbito electoral.

Por otro lado, Javier Valle-Riestra, indica que en esta constitución tampoco se encuentran cambios considerables respecto a la Inmunidad Parlamentaria, salvo el Artículo 92°, en el cual se establece que:

«Los diputados y los senadores representan a la Nación, y no están sujetos a mandato imperativo» (Constitución Política de Perú de 1933)

Esto se debe a que el sistema vigente es el democrático. Por otro lado, en el Artículo 105° establece que:

«Los senadores y los Diputados son inviolables en el ejercicio de sus funciones, y no pueden ser acusados ni presos sin previa autorización de la Cámara a que pertenecen, (...) excepto en flagrante delito, en cuyo caso serán puestos dentro de las veinticuatro horas a disposición de su respectiva Cámara» (Constitución Política de Perú de 1933).

Cabe precisar, que este artículo se encuentra presente dentro de las anteriores Constituciones, siendo una prueba vigente que a pesar de que el Perú atravesó por los gobiernos que muchas veces fueron autoritarios y hasta dictatoriales, se respetó este instrumento de defensa de los parlamentarios frente al abuso del poder por parte de los otros poderes del Estado, en especial de un líder caudillista.

2.10 La Constitución para la República del Perú de 1979

Respecto a la materia que nos interesa en la investigación, el mecanismo de protección parlamentaria (Inmunidad Parlamentaria) está establecida en el artículo 176° que es el antecedente más próximo de la actual Constitución (1993) vigente del Perú (Valle-Riestra, 2009). En este artículo se establece que:

«Los senadores y diputados (...) no son responsables ante autoridad ni tribunal alguno por los votos de opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones (...) No pueden ser procesados ni presos, sin previa autorización de la Cámara a que pertenecen o de la Comisión Permanente, (...) son puestos a disposición de su respectiva Cámara o de la Comisión Permanente (...)». (Constitución Política del Perú de 1979).

En comparación con las anteriores Constituciones no presenta cambios sustanciales, pero si ligeros puntos específicos que en las otras cartas solo se mencionaban generalidades. Pero cabe destacar, que estas particularidades ayudan a que el Parlamentario puedan desempeñar mejor sus funciones, puesto que cuentan con un marco legal que los respalda y sobre todo el apoyo del sector de la población que los eligió y que puedan gozar de esta autonomía que se encuentra en los cambios realizados a la presente Constitución.

2.11 La Constitución Política Del Perú de 1993

Es posible advertir que tanto la Constitución del 79 como la del 93 cuentan con mucha similitud respecto a la inmunidad parlamentaria. Se puede señalar que en el inciso uno del artículo 93° de esta Carta Política, se estipula que las representaciones de los Funcionarios del Poder Legislativos están sujetos a ciertos principios, los cuales son los siguientes:

a) «Los Congresistas representan a la Nación, es decir, que cada uno de ellos representa a todos los ciudadanos idealmente configurados dentro de la Nación (Constitución Política del Perú de 1993).

b) No están sujetos a mandato imperativo ni a la interpretación, el primero hace referencia a que los congresistas deben defender posiciones y votar con respecto a sus representados, es por ello que no puede haber voto imperativo sobre ellos». (Constitución Política del Perú de 1993).

Asimismo, en el inciso dos nos menciona que la Inviolabilidad parlamentaria, esta entendida como la irresponsabilidad del parlamentario(a) por las expresiones que puedan emitir, así también sobre los votos que realizan en sus actividades parlamentarias. Esta prerrogativa es un instrumento de protección contra las denuncias, procesos y en global de acciones judiciales en contra de los Congresistas que cumplen con sus funciones legislativas y que cualquier autoridad jurisdiccional no le puede interpelar. Por otro lado,

Valle Riestra señala sobre lo contenido en esta Carta respecto a la inmunidad parlamentaria:

«La Inmunidad parlamentaria consiste en el que el congresista no puede ser detenido ni procesado, por asunto jurídico alguno, mientras ello no haya autorizado por el Congreso» (Valle-Riestra, 2009).

Es en el contexto de lo dispuesto en la Constitución vigente en la que centramos el análisis de la presente investigación. A pesar de los múltiples sucesos aparecidos recientemente en los que se da cuenta de comportamientos inadecuados de varios congresistas, ¿qué tan importante es mantener la institución de la inmunidad parlamentaria para cautelar un adecuado balance de poderes?

CAPÍTULO III

LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA EN EL DERECHO COMPARADO LATINOAMERICANO

Cabe señalar, que este instrumento de protección de la función legislativa es necesaria a un efectivo equilibrio de poderes dentro de un Estado y de esta manera, garantizar un adecuado funcionamiento del sistema democrático vigente hoy en día en los países de la región. Por ende, con el propósito de entender y comprender esta prerrogativa en los países de estudio, nos hemos visto en la necesidad de estudiar sus respectivas constituciones y leyes orgánicas del poder Legislativo

3.1 Inmunidad Parlamentaria en Argentina:

Esta Prerrogativa legislativa es un mecanismo con los que cuentan los legisladores de diversos países, y Argentina no es la excepción, puesto que estipula en su Constitución lo siguiente:

«Artículo 68°- Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador.

Artículo 69°- Ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti

en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte (...)». (Asamblea Constituyente de Argentina , 1994)

Se puede apreciar que dichos artículos son muy similares al caso peruano, esto debido a que como se explica en la (Comisión de Constitución y Reglamento , 2019) el órgano que solicita el pedido de levantamiento en Argentina al igual que en el Perú es el Poder Judicial y la institución encargada de concederlo en ambos casos es el Congreso; asimismo ambos detallan que si el legislador se encuentra en flagrancia de delito si están a disposición de ser juzgados; a partir de esos puntos se puede analizar dos marcadas diferencias respecto de la inmunidad peruana.

Primero que mencionando el caso de flagrancia en el Perú solo sería arrestado, pero para los congresistas argentinos están en condición de hasta recibir la pena de muerte, modalidad que en Perú está prohibido. Otra diferenciación es que la inmunidad parlamentaria con la que ellos gozan es restringida, respecto a la prerrogativa que rige en el Perú, puesto que en nuestro país se cuenta con la inmunidad de tanto de arresto como la de proceso; sin embargo, para el caso argentino solo se da para la condición de arresto y en la de proceso pueden ser investigados por el Poder Judicial excepto cuando necesitan disposiciones de allanamiento, interceptación telefónica deben contar con una previa autorización de ese Parlamento.

3.2 Inmunidad Parlamentaria en Brasil:

Brasil es uno de los muchos países en la que la inmunidad parlamentaria se mantiene vigente y en la actualidad dicha prerrogativa ha causado un enfrentamiento con sus ciudadanos por los diversos casos de corrupción que se hicieron públicos, por lo que si bien su Constitución establece lo siguiente:

«Art. 53. Los diputados y Senadores son inviolables por sus opiniones, palabras y votos. Desde la expedición del acta, los miembros del Congreso Nacional podrán ser detenidos, salvo en caso de delito flagrante no afianzable, ni

procesados penalmente, sin previa licencia de su Cámara». (Congreso Constituyente del Brasil , 1988)

En efecto, se mencionan los privilegios con los que contaría su cuerpo legislativo y tienen una amplitud que permite que los legisladores no puedan ser procesados por crímenes comunes, pues pueden ser suspendido la investigación una vez asumido el cargo; en el caso brasileño el órgano encargado de realizar el juzgamiento de los parlamentarios es el Tribunal Supremo Federal, pero la lentitud con los que resuelve los procesos judiciales del órgano legislativo ha hecho que se modifique su funcionamiento y optado que el Tribunal solo resuelva denuncias relacionados a la potestad de ejercer la función legislativa y aquellos aspecto de delitos comunes serán jugados por la justicia ordinaria; dicha decisión si bien es cierto es una medida para apaciguar los fuertes cuestionamientos al Poder Legislativo de todos modos hace que se reduzca la autonomía con la que se debería manejar los asuntos concernientes a dicho Congreso.

3.3 Inmunidad Parlamentaria en Chile:

Para este país la modalidad de la inmunidad parlamentaria que se otorga es tanto para arresto como para la de proceso y es solicitado por el Poder Judicial Chileno; como se expone en su Constitución:

«Artículo 61. Los diputados y senadores sólo son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos, en sesiones de sala o de comisión.

Ningún diputado o senador, (...) puede ser acusado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el Tribunal de Alzada de la jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a formación de causa. De esta resolución podrá apelarse para ante la Corte Suprema (...)» (Constitución Política de la República de Chile, 1980)

En tal art. se establece que no habrá denuncia ni arresto por circunstancias de opinión o por las decisiones que tomen exclusivamente en sesión, es decir, da la posibilidad de que aquellos comentarios vertidos en espacios distintos a los mencionados pueden ser motivo de denuncia y ya se han presentado casos de procesamiento de legisladores en la justicia chilena. Ahora, identificando el órgano que concederá que se levante el mecanismo de protección del parlamentario a cargo del Tribunal de Alzada y una característica peculiar que implementó este país es que la decisión que toma dicho Tribunal puede ser apelado ante la Corte Suprema, dando paso a un cuestionamiento de la decisión política bajo la que supuestamente se rige la protección de los legisladores.

3.4 Inmunidad Parlamentaria en Colombia:

Los legisladores colombianos no cuentan con inmunidad parlamentaria y esto es desde la Constitución de 1991 que eliminó dicho privilegio por los supuestos actos de criminalidad realizados por los miembros de ese cuerpo legislativo y esta se expresa en su carta magna:

«Artículo 186. De los delitos que cometan los congresistas, conocerá en forma privativa la Corte Suprema de Justicia, única autoridad que podrá ordenar su detención. En caso de flagrante delito deberán ser aprehendidos y puestos inmediatamente a disposición de la misma corporación». (Asamblea Nacional Constituyente de Colombia, 1991)

La única distinción frente al resto de ciudadanos es que sus casos son investigados por instancias del más alto tribunal de justicia, siendo así la Corte Suprema quien lleva de manera exclusiva sus procesos y teniendo la condición de apelar a una doble instancia y el derecho de impugnación; sin embargo, la condición de que los legisladores de ese país no cuenten con dicho mecanismo les lleva a enfrentar diversas denuncias y tal es el caso que por la cantidad de denuncias la misma Corte Suprema tiene un déficit en el

procesamiento de estos, lo que llevó a que en el 2018 se vuelva a replantear la posibilidad de un retorno de la inmunidad parlamentaria.

3.5 Inmunidad Parlamentaria en Uruguay:

En el caso uruguayo sus legisladores cuentan con un grado de independencia mayor respecto al resto de países latinoamericanos, ya que no solo la inmunidad que tienen es por arresto y proceso, sino que no puede ser acusados por motivos que no estén expresamente mencionados en su Constitución, como se menciona en los siguientes artículos:

Artículo 93. Compete a la Cámara de Representantes el derecho exclusivo de acusar ante la Cámara de Senadores a los miembros de ambas Cámaras, (...) por violación de la Constitución u otros delitos graves, después de haber conocido sobre ellos a petición de parte o de algunos de sus miembros y declarado haber lugar a la formación de causa (...).

Artículo 114. Ningún Senador o Representante, desde el día de su elección hasta el de su cese, podrá ser acusado criminalmente, ni aun por delitos comunes que no sean de los detallados en el artículo 93». (Asamblea General de Uruguay, 1967)

Siendo la modalidad del levantamiento de inmunidad responsabilidad de cada cámara legislativa y solo dicho órgano podrá juzgar a sus propios miembros y estipular que tipo de condena les correspondería de ser el caso de encontrarlos culpables.

3.6 Inmunidad Parlamentaria en Guatemala:

En el artículo 161° de la Constitución Política de la República de Guatemala está presente la figura jurídica de la Inmunidad Parlamentaria en sus dos modalidades, tanto de Arresto como de Proceso; en la cual se establece que los diputados son representantes del pueblo

y dignatarios de la Nación. Los parlamentarios cuentan con este mecanismo de protección para el ejercicio de sus funciones, puesto que la ley consigna que:

«El Diputado no podrá ser detenido ni juzgado desde la proclamación hasta la conclusión de su mandato, si la Corte Suprema de Justicia no declara previamente que da lugar a formación de causa, después de conocer el informe del juez pesquisador que deberá nombrar para el efecto. Se exceptúa el caso de flagrante delito en que el diputado sindicado deberá ser puesto inmediatamente a disposición de la Junta Directiva o Comisión Permanente del Congreso para los efectos del antejuicio correspondiente»(Constitución de la República de Guatemala, 1993).

Por ende, se puede precisar que el Congreso, es el órgano quien decide o no levantar esta prerrogativa a los parlamentarios, ya que este es competente para determinar si hay o no arbitrariedad en los actos de los congresistas al respaldarse en su inmunidad y así imponer sanciones según corresponda.

3.7 Inmunidad Parlamentaria en Nicaragua

En Nicaragua el mecanismo de la Inmunidad Parlamentaria está consignada en su (Constitución de la República de Nicaragua , 1948), específicamente en el artículo 140°, donde se establece que los parlamentarios no están sujetos a responsabilidad por sus expresiones y los votos realizados dentro de las sesiones de la Asamblea Nacional. Como en algunos países de Latinoamérica esta figura jurídica ha pasado por varias reformas para alcanzar cierto grado de idoneidad al ser ejecutada, ya que la imagen de esta prerrogativa se ha desvirtuado en este país, esto debido a las altas denuncias contra los parlamentarios por actos de corrupción. Cabe destacar, que no solo los parlamentarios gozan de esta prerrogativa, sino también el Presidente y vicepresidente, así como otros altos funcionarios.

No obstante, las diferencias entre la Inmunidad del Parlamento y la Inmunidad que gozan los otros funcionarios (Poder Ejecutivo) radican en los siguientes puntos:

«Se establece en la ley orgánica del Poder Legislativo, que las personas afectadas por la actuación de Ministros y Viceministros, Presidentes o directores de Entes Autónomos y Gubernamentales en el ejercicio de su cargo, deberá ser interpuesta primero ante el Presidente de la República quien en un plazo de ocho días hábiles deberá remitir la queja a la Asamblea Nacional para su conocimiento y resolución» (Constitución de la República de Nicaragua , 1948).

A diferencia de la Inmunidad del Parlamento que es regulada por la Ley orgánica, donde estipula que, para privar de esta prerrogativa de protección a un funcionario, es necesario un antecedente previo como una queja de las acciones de los parlamentarios ante la Asamblea nacional, y posterior a ello se debe evaluar si esta está consignada dentro de la normativa donde figura las causales por la cual se tendría que levantar la inmunidad al diputado, es así que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional titula a 5 representantes que integran la Comisión Especial que dentro de sus funciones esta evaluar si concede o no la venia para levantar la Inmunidad Parlamentaria del diputado (Asamblea Nacional , 2015). De esta manera, se puede determinar que el proceso para el levantamiento de la Inmunidad parlamentaria es más complejo para los funcionarios del Poder Ejecutivo, ya que se someten a una comisión conformada por miembros de la Asamblea Nacional y en comparación a nuestra normativa peruana en el caso de levantamiento de la inmunidad se da de la misma manera.

3.8 Inmunidad Parlamentaria en Venezuela:

En el caso de la legislación de Venezuela los beneficios de los funcionarios parlamentarios se conciben de manera agrupado; asimismo, de manera individual. La primera, consiste en

las protecciones que otorga la Constitución Nacional de Venezuela al órgano Parlamentario, quien otorga autonomía plena para la labor del parlamentario; tal como se establece en el art. 159° lo siguiente:

«Los actos de los cuerpos legislativos en ejercicio de sus funciones privativas no estarán sometidos al veto, examen o control de los otros poderes salvo lo que esta Constitución establece sobre extralimitación de atribuciones» (Asamblea Constituyente , 1961).

En efecto, se entiende que en el acuerdo establecido en este artículo solo es posible recurrir en contra del Parlamento, cuando este ente extralimite sus funciones. Asimismo, (Paz de Henríquez), nos menciona que los beneficios del parlamentario de manera individual, funciona como mecanismo de protección que no pueden utilizar al libre albedrío, sino como el constitucionalista sugiere, que todo el cuerpo legislativo no puede usar esta prerrogativa para satisfacer sus fines personales, sino que esta tiene la finalidad de proteger al órgano en conjunto, para que este pueda ejercer de manera libre e independiente sus labores de parlamentarios; es decir los parlamentarios gozan de la inmunidad procesal.

Es así que La Inmunidad Procesal se estableció como prerrogativa en el artículo 143° de la Constitución (1961), donde se determina que:

«Los Senadores y Diputados gozarán de inmunidad desde la fecha de su proclamación, hasta veinte días después de concluido su mandato o de la renuncia del mismo, y en consecuencia, no podrán ser arrestados, detenidos, confinados, ni sometidos a juicio penal, a registro personal o domiciliario, ni coartados en el ejercicio de sus funciones». (Asamblea Constituyente , 1961)

Por ende, se puede entender que la Inmunidad Parlamentaria es entendida como un instrumento de protección de los Parlamentarios frente a los otros poderes del Estado; asimismo, bajo la normativa venezolana se puede comprender que este es el conjunto de

disposiciones constitucionales a favor a los parlamentarios y hace que prevalezca la autonomía de este, es decir que el parlamento venezolano goza de autonomía en la función legislativa. No obstante, esto no se puede observar en la coyuntura actual de este país, donde solo queda en la norma esta prerrogativa.

CAPÍTULO IV
ROL DEL PODER JUDICIAL EN LA EVALUACIÓN DEL FUERO DE OTROS
PODERES DEL ESTADO A LO LARGO DE LA HISTORIA CONSTITUCIONAL
PERUANA

En este capítulo mencionaremos un aspecto importante de nuestro Sistema Constitucional, como es el fuero de otros poderes del Estado; para ello se tomará en cuenta la importancia del “Juicio de Residencia”. Por ende, es preciso mencionar a Augusto Medina, quien expone dos casos interesantes acerca de cómo se gesta el control político en el Poder Legislativo en nuestro país.

Como bien explica(Augusto Medina Otazu, 2007), esto se refleja en el caso de los presidentes Ramón Castilla y Rufino Echenique, quienes se vieron inmersos en conflictos y el modo como utilizaron la figura del Juicio de Residencia a manera de argumento para justificar los intereses particulares de cada facción. El primero, queriéndose perpetuar en el poder y valiéndose de mecanismos para no someterse a dicho control político; puesto que implicaba responsabilidad de este en los actos de administración dentro de su gobierno. Por otro lado, el segundo, queriéndose reponer en el cargo de mandatario, pues los motivos por el cual Castilla lo derrocó para él no eran suficientes, por ende, estaba dispuesto de comparecer ante la Corte Suprema y ser juzgado por tales actos. Sin embargo, Castilla temía que este sea repuesto al cargo y él figure como usurpador de funciones.

En efecto, estos conflictos grafican el contexto en el cual estaba vigente este instrumento, que no solo se presentaba querellas entre quienes aspiraban y ostentaban el poder político; sino también, estaba presente la constante pugna entre el Ejecutivo y el Parlamento; esto queda demostrado en la promulgación de constituciones que prácticamente eran personalizadas por los mandatarios quienes la promulgaban a fin de alcanzar sus objetivos políticos.

Es así que, en la constitución de 1839 se consigna el mecanismo de Juicio de Residencia, donde el Presidente estaba sujeto a rendir cuentas una vez finalizando su gobierno. Esta figura no solo era aplicada al mandatario, sino también a funcionarios públicos luego que cesen en sus funciones; cabe destacar, que el ente encargado de la aplicación de este mecanismo era la Corte Suprema. Por ende, en esta Constitución se daba una separación de poderes marcada, ya que el Poder Judicial tenían la potestad de abrir investigación y dar sentencia a los altos funcionarios sin ninguna traba de parte de los otros poderes del Estado, esto dentro del marco constitucional.

Sin embargo, en la Carta Política de 1856 (la Constitución que introduce aspectos liberales), el Ejecutivo es desplazado en funciones a diferencia de un Parlamento fortalecido, quien entablo un debate con el ejecutivo (presidente Castilla) al respecto de la explicación de los artículos de la Carta Política que hacen referencia al Juicio de Residencia en conveniencia de su propio interés; no obstante, por la misma naturaleza de la Constitución quien limitó en funciones al ejecutivo, este no pudo disponer del marco legal para tales fines, logrando el Parlamento absorber esta función del Poder Judicial, quien también se vio limitado en ese aspecto.

Por ende, la Constitución de 1860 responde de manera conservadora a un contexto político de enfrentamiento entre el Parlamento y el Ejecutivo, quedando como resultado la anulación del Juicio de Residencia en dicha Carta Política, desde ese entonces hasta el día de hoy. Ya que el poder legislativo al tener la potestad de decidir si se iniciaría el Juicio

de Residencia o no a los altos funcionarios, con ello va quedando demostrado que el Poder Judicial es desplazado y solo los poderes del Ejecutivo y el Legislativo van a tener relevancia dentro de estos debates, como podemos observar esto hasta el día de hoy, el Poder Judicial se muestra como un ente pasivo frente a las reformas aplicadas en su ámbito.

Asimismo, queda establecer que en nuestra Constitución Política del Perú de 1993 en el artículo 202° inciso 3° se configura el Proceso Competencial, que es:

«Conocer los conflictos de competencia, o de atribuciones asignadas por la Constitución, conforme a ley» (Congreso Constituyente Democrático, 1993).

Esto es como resultado de que los órganos y poderes del Estado caían en una falta de limitación de funciones, y esto era aprovechado por algunos mandatarios para imponer sus aspiraciones políticas, con esto ya se determinó cuáles son las funciones de cada poder del Estado; de esta manera queda relegada el Poder Judicial frente al resto de poderes (José F. Palomino Manchego & Harold Castillo Veintimilla, 2007).

Por último, en nuestra coyuntura política se ha dado mucho el cuestionamiento acerca de que si los Congresistas deberían contar con este mecanismo de protección de la I.P, puesto que es un instrumento de protección frente a los otros poderes del Estado; no obstante, dicho mecanismo si debería estar establecido, ya que permite la libre ejecución de sus funciones parlamentarias y quizá el cuestionamiento no sería referente si se tiene o no la inmunidad, sino que quien estaría a cargo de levantar el fuero, y como menciona Medina:

«El Poder Judicial perdió una de las figuras más importantes de control político como es el juicio de residencia. Actualmente la ciencia política en el Perú pretende revivirlo por cuanto los altos funcionarios del Estado sólo pueden ser sometidos a juicio político o juicio por delito de función, únicas causas para

*habilitar la sanción o investigación por el Parlamento al término de la función»
(Augusto Medina Otazu, 2016).*

El Poder Judicial se vio desestimado acerca de su función de juzgar a los altos funcionarios públicos, desde la pérdida del Juicio de Residencia y actualmente tampoco posee estas competencias ni tienen el marco normativo que los respalde ni la incitativa para retomarlo.

CAPÍTULO V

ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE ALTO NIVEL PARA LA REFORMA POLÍTICA REFERIDA A LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA

Para nuestro analista (Vásquez Ríos, 2019), el mecanismo de la inmunidad parlamentaria— en su origen histórico- tiene sus antecedentes en las monarquías europeas; sin embargo, el caso más relevante lo podemos encontrar en la Francia del siglo XVIII que, en reacción al absolutismo que se vivía en aquellos tiempos, buscaba garantizar la invulnerabilidad de su naciente Asamblea Nacional, respecto de las acciones restrictivas que pudieran aplicarse desde cualquier instancia de poder como represalia ante la eventual disidencia de los representantes del pueblo.

De modo que, para nuestra realidad actual, esta prerrogativa congresal se refiere al impedimento de cualquier órgano jurisdiccional para regular a un congresista durante las actividades legislativas y encaminarlo a un proceso judicial en razón de las expresiones, mociones, informes y al realizar los votos que puede ser emitidos por éste. En ese mismo sentido, el objetivo de esta prerrogativa parlamentaria sería el de dotar de independencia y libertad al legislador para que pueda ser protegido ante la eventualidad de una persecución política (Vásquez Ríos, 2019). La Constitución Política le atribuye al Poder Legislativo tres funciones fundamentales: la función legislativa, la función de representación y la función de control político. En un sistema de gobierno regido por el

principio de separación de poderes, la inmunidad parlamentaria se constituye en una institución que le da sustento y que garantiza ese necesario balance al brindarle protección al poder legislativo para el ejercicio de sus funciones, sobre todo las de representación y control político, pues ellas inciden directamente en el quehacer del ejecutivo.

Ahora bien, en la actualidad se ha llegado a un profundo cuestionamiento, y con ella, a una crisis de esta institucionalidad a razón de un mal ejercicio de este legítimo mecanismo de defensa. A lo cual, podemos decir entonces que, en su práctica, dicha institución ha sido tergiversada tanto en su naturaleza, como en sus fundamentos. Una institución que, como vimos en las páginas precedentes, tuvo en su origen una finalidad fundacional para la consolidación de los estados democráticos y que, además, fue parte estructural de nuestra tradición constitucional, fue perdiendo esa razón de ser por los comportamientos específicos de no pocos parlamentarios que, durante los últimos años, trastocaron su finalidad esencial para convertirla en instrumento de impunidad. A medida que esos comportamientos fueron haciéndose cada vez más visibles y escandalosos, la legitimidad de la inmunidad parlamentaria ante los ojos de la sociedad se fue perdiendo de manera inevitable.

Y así lo muestra un estudio realizado por (Proética, 2019) respecto a la relación a los procesos donde se levanta la inmunidad parlamentaria de los distintos etapas legislativas (2006-2011, 2011-2016 y 2016-2019). En ella, se esclarece que la Corte Suprema de Justicia presentó en total 40 solicitudes de fuero parlamentario y que, de ese número, solo 6 solicitudes fueron aprobadas por el mismo Congreso.

Esto, respondería a la deslegitimada prerrogativa congresal que la ciudadanía percibe hacia sus representantes; pues dicha institución estaría siendo instrumentalizada por parte de los parlamentarios acorde a intereses de algunas bancadas, y defendidas por las fuerzas políticas con más capital político en el Congreso. Esto ha impedido que el Ministerio Público pueda investigar, y al Poder Judicial, procesar, a aquellos congresistas que hayan

cometido algún delito tanto durante su periodo parlamentario, como –yendo incluso en contra de su propio Reglamento del (Congreso de la República del Perú , 1995)- antes de tomar su investidura. Así, utilizando las distintas facultades congresales que por derecho se obtiene al alcanzar una curul, los congresistas negociarían con las distintas fuerzas políticas para que puedan ser apañados y/o protegidos (a través de los votos) por una o más bancadas políticas que cuenta con la suficiente fuerza para trabar el procedimiento, o simplemente mandarlo de frente al archivo.

Como podemos colegir de los párrafos precedentes esta situación ha tenido una enorme incidencia en un problema aún mayor y que ha sido subyacente en nuestra historia política reciente: la crisis de representación. Por un lado, una ciudadanía cada vez más distante de su clase política, y por el otro, un Estado incapaz de reconocer los apremios cada vez más evidentes de una población sobrepasada por el espectáculo permanente de sus “representantes” en situaciones abyectas. Cuando ello ocurre, lo que se pone en juego es el propio orden democrático, pues cuando el ciudadano (que es finalmente quien legitima la institucionalidad democrática) siente que sus gobernantes o sus representantes en el Congreso contradicen con sus actos los fines para los que fueron elegidos, se siente estafado y puede poner en cuestionamiento la propia utilidad de la democracia. Más aún si, como ha ocurrido durante los últimos cinco años, hemos sido testigos de una crisis política permanente y un escenario de confrontación entre el Congreso y el Ejecutivo que devino en la inédita situación de tener cuatro presidentes y dos congresos en un mismo periodo de gobierno. Todo ello constituye un enorme caldo de cultivo para la irrupción de posturas radicales y disruptivas, pero además frenó el proceso de consolidación democrática iniciado en nuestro país con el gobierno de transición de Valentín Paniagua luego de la caída del régimen de Fujimori y Montesinos.

Así, frente a esta problemática, el Poder Ejecutivo tomó la iniciativa de conformar la Comisión de Alto Nivel de Reforma Política, la cual recomendó en su informe final, que el

levantamiento de Inmunidad ya no estaría a cargo del Congreso, sino el único encargado sería la Corte Suprema de Justicia (salvo el caso de delito flagrante), desde el primer día de su elección hasta terminado sus funciones de parlamentarios. Según el proyecto, que se manifiesta sobre el pedido del fuero parlamentario debe concederse dentro del periodo impostergradable de 30 días hábiles tras ser recibido.

Para entender mejor la reforma constitucional planteada por la Comisión de Alto Nivel presentamos el siguiente cuadro comparativo entre la norma vigente del año pasado y la propuesta de la Comisión:

TEXTO VIGENTE AL AÑO 2020	TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN DE ALTO NIVEL
<p>Artículo 93.- Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de sus funciones.</p> <p>No pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las veinticuatro horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento.</p>	<p>Artículo 93.- Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de sus funciones.</p> <p>No pueden ser procesados ni detenidos sin previa autorización de la Corte Suprema de Justicia, salvo el caso de delito flagrante, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones. El pronunciamiento debe darse dentro del plazo improrrogable de 30 días hábiles de recibido dicho pedido. En caso de ser detenido por delito flagrante, el congresista será puesto inmediatamente a disposición del Fiscal de la Nación.</p> <p>No se requiere pronunciamiento previo de la Corte Suprema por hechos anteriores a la elección.</p>

	<p>Los procesos penales contra congresistas son de competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia.</p> <p>Corresponde al Pleno del Congreso, con el voto de los dos tercios del número legal de sus miembros, suspender o no al congresista mientras dure el proceso iniciado en su contra cuando se trate de delitos dolosos con pena mayor a cuatro años.</p>
--	--

Fuente: Elaboración propia a partir de la Constitución Política de 1993 y el Informe Final de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política

Como se puede desprender del cuadro, ahora ya no sería ahora necesario el fuero de la Inmunidad para el arresto o continuar con el juicio de un parlamentario por los procesos que estuvieron vigentes antes de su elección; ya que, en estos casos, no se requeriría manifestación alguna de la Corte Suprema de Justicia o del Parlamento de la República. Y, además:

«El proyecto corresponde al pleno del Congreso, con el voto de los dos tercios del número legal de sus miembros, suspender o no al congresista mientras dure el proceso iniciado en su contra cuando se trate de delitos dolosos» (Comisión de Constitución y Reglamento , 2019).

La propuesta tiene también un cambio sustantivo respecto a los casos de flagrancia, pues mientras que en la norma vigente se dejaba finalmente en el fuero parlamentario la decisión de autorizar o no su enjuiciamiento y privación de libertad, en la propuesta de la Comisión de Alto Nivel se señala que en esos casos el congresista es puesto a disposición del Fiscal de la Nación, incorporándose un actor más a los procedimientos vinculados con la inmunidad parlamentaria.

Esta reforma política presentada, fue muy bien vista por la mayoría de la ciudadanía, pues estos han sido testigos de todos los lamentables escenarios respecto al mal uso de la inmunidad parlamentaria. Y a lo que distintos analistas considerarían a la negociación política como la única razón de estos actos y estrategias que tendrían algunos congresistas para escapar de la justicia. Y esto, no sólo habría conllevado a una mala práctica congresal, sino también, a la pérdida de la representación auténtica pues el congresista infractor, al negociar su voto por un blindaje a su favor, perdería su libertad y conciencia al momento de emitir algún voto que pueda que sus representados no esté de acuerdo, o que incluso peor, vaya en contra de los intereses de sus electores que lo llevaron al poder. En ese sentido, el parlamentario perdería un valor y un funcionamiento fundamental de su cargo congresal, que es el de representar.

Por otra parte, pero sin salir aún del tema,—según una encuesta de (DATUM) de mayo del 2018-, el 70% de la población (encuestada) está a favor de la eliminación de esta prerrogativa congresal. Y en abril de 2019, la empresa IPSOS registró que un 66% de los encuestados está de acuerdo que los procesos de inmunidad parlamentaria sean decididos por la Corte Suprema de Justicia. Así, la concepción que tiene el ciudadano de a pie respecto al Poder Legislativo, es percibida como la institución más corrupta del país, dando por consecuencia una pérdida de legitimidad hacia este importante poder del Estado. Ese razonamiento señala que, de aprobarse esta reforma política, el ejercicio y actividad de los congresistas estaría más acorde a los parámetros del buen valor que demanda la ley; y justificando después, el poder político que hasta ahora se había perdido.

Por consiguiente, al recobro de la legitimidad del Poder Legislativo, entendida ésta como la justificación del poder hacia los gobernados; el alcance —de aprobarse- que también tuviera el proyecto político, sería restablecer la confianza de la población peruana en la política. Y aquí, es necesario precisar que puede haber una clara desconfianza ciudadana respecto a un político y/o institución (política o no) sin existir alguna deslegitimidad respecto

a esta(Cueto, 2007). Pero que lamentablemente ello, no ha sido hasta ahora si quiera nuestro caso con respecto al Congreso, pues las indignaciones respecto a la inmunidad parlamentaria partieron desde casos concretos de congresistas cuestionados ante la justicia. De modo que, desapareciendo la oportunidad de que el mismo Parlamento impida el accionar del Poder Judicial, la ciudadanía recobraría por consecuencia su confianza hacia ella, y así alcanzar luego a la vez su necesaria legitimidad.

Así también, de manera muy breve, habiendo entendido anteriormente a la confianza ciudadana como potenciador y garantizador del funcionamiento de un sistema; podemos esperar de esta reforma un mejor funcionamiento de nuestro sistema política actual. Pues, el recobro de la confianza y la legitimidad, harían recuperar a la vez los valores democráticos que hoy en día a causa de la crisis y tensión política, se habría estado perdiendo y cuestionando.

Estos nuevos panoramas de aprobarse la reforma política, cambiaría a la vez el sentido y/o intención de algunos aspirantes al Congreso. Pues con esta, ya no habría la posibilidad de alcanzar una curul para ser esquivo de la justicia con la inmunidad parlamentaria. Y así también lo entendería la Fiscalía de la Nación y/o la ciudadanía quienes se beneficiarían al lograr el acceso a la justicia al contar ahora con la total libertad de demandar y/o investigar a un congresista que haya cometido algún delito durante o antes de haber ejercido el cargo congresal. Esto, por consecuencia, además, daría una impresión de igualdad ante la ley para toda la población frente a sus gobernantes-representantes.

Sin embargo, por otro lado, existen también posturas disidentes y críticas respecto al proyecto presentado por la Comisión de Alto Nivel de Reforma Política. Algunas enfocan su atención en la cuestión económica, pues se señala que la implementación de este proyecto podría generar mayores demandas de recursos para el Poder Judicial por la carga judicial adicional que tendría que atender. Creemos que este cuestionamiento es

inconsistente pues en la práctica la Corte Suprema ya examina las denuncias contra congresistas por delitos comunes.

Como vemos, las razones que hasta aquí sustentan claramente la pertinencia de la propuesta de la Comisión de Alto Nivel respecto a la inmunidad parlamentaria, tienen asidero en hechos fácticos recientes y en su impacto en la ciudadanía y en la legitimidad que ésta le da a las instituciones democráticas que la gobiernan, tal como lo demuestran los estudios de opinión consignados en los párrafos precedentes. Ha abonado en este razonamiento y en las motivaciones expuestas por la Comisión de Alto Nivel la gravedad de la confrontación política expresada en el último quinquenio en el que una absoluta mayoría parlamentaria era una fuerza de oposición al gobierno propiciando escenarios de conflicto y crisis permanentes. Sin embargo, creemos que el análisis de esta pertinencia debe ser hecha también a la luz de nuestra tradición constitucional y de una perspectiva histórica más amplia.

Resulta también oportuno y necesario evaluar el rol que le asigna la propuesta de la Comisión de Alto Nivel a la Corte Suprema para el procesamiento y juzgamiento de los congresistas. La propuesta, señala, asimismo que los procesos penales de los congresistas son de competencia exclusiva de la Corte Suprema. El dato no es menor pues supone la creación de un fuero especial dentro del Poder Judicial para el procesamiento y el juzgamiento. Quiere decir que, salvo los casos de flagrancia, se subroga de esa facultad al Ministerio Público otorgándosele también la investigación del delito a la Corte Suprema. En la exposición de motivos del proyecto de ley propuesto por la Comisión de Alto Nivel sobre este aspecto específico se esgrimen tres razones:

- a) Los jueces supremos, al ocupar la más alta jerarquía dentro del sistema de justicia, no tendrán las mismas presiones que los jueces ordinarios para resolver de mejor modo.
- b) El hecho de que los procesos se inicien y concluyan en un solo fuero permiten predictibilidad y criterios uniformes y estables.

c) La fortaleza en la visibilidad del Poder Judicial propende a una mayor corrección en el actuar de los jueces.

De alguna manera, estas consideraciones constituyen una reivindicación histórica del rol de la Corte Suprema en la pérdida paulatina de sus competencias respecto al juzgamiento de las autoridades políticas desde la desaparición del juicio de residencia.

Dicho todo esto, consideramos también que lo realmente relevante en el análisis del proyecto que pretende trasladar al Poder Judicial el levantamiento de la inmunidad de los congresistas es el impacto que esto tendría en el sistema de separación y balance de poderes con que funciona un Estado de Derecho como el nuestro. Es verdad, como se ha señalado en los párrafos precedentes, que durante los últimos años hay abundantes casos vinculados con la inmunidad parlamentaria que han provocado la indignación de la ciudadanía, pero también es cierto que hay ejemplos múltiples en los que no se hubieran llevado a cabo investigaciones muy importantes llevadas a cabo por parlamentarios (como la investigación del caso Orellana o las investigaciones de los crímenes cometidos en La Cantuta) de no haber contado los parlamentarios que las hicieron con la inmunidad como instrumento de resistencia. A eso nos referimos cuando señalamos que el análisis de esta propuesta merece también una mirada histórica más amplia y no necesariamente acotada a los hechos de los últimos 10 años. Recordemos que en nuestro pasado no tan reciente, más precisamente en la década de gobierno de Fujimori y Montesinos, fue el Poder Ejecutivo el que avasalló de manera manifiesta y evidente los otros poderes del Estado (incluida la Corte Suprema del Poder Judicial y el Ministerio Público) lo que le permitió consolidar un régimen con caracteres claramente antidemocráticos. Todo ello fue constatado en los llamados vladivideos en los que se vio como los jueces supremos se ponían al servicio irrestricto de los intereses del régimen de entonces.

Por ello creemos que, por un lado, a la luz de lo analizado en nuestra tradición constitucional a través de las diversas constituciones que han regido nuestra historia

republicana y en la que es posible advertir que, casi por unanimidad, hay una vocación de cautela a la institución de la inmunidad parlamentaria y, por otro lado, en el contexto de lo visto en el panorama regional (en la que también se puede apreciar que la mayoría de países opta por mantener la inmunidad parlamentaria en el fuero del propio parlamento), la propuesta de trasladar la evaluación del levantamiento del fuero parlamentario a la Corte Suprema puede no ser solo impertinente, si no además peligrosa. El perfeccionamiento o revisión de las instituciones jurídicas que tienen relación directa con el balance de poderes y el sistema de representación no puede estar supeditado a evaluaciones coyunturales. Tal vez sea posible incorporar algunas precisiones en el Reglamento del Congreso que hagan más expeditivo el procedimiento para levantar la inmunidad, pero su esencia debe ser mantenida.

No obstante lo señalado en los párrafos anteriores, y a manera de acápite final, consideramos pertinente señalar a modo de actualización, que el jueves 04 de febrero de 2021 el Pleno del Congreso aprobó en segunda votación una reforma constitucional que elimina la inmunidad parlamentaria, la misma que fue finalmente promulgada por el Presidente Francisco Sagasti el 05 de febrero. Esta ley establece que el procesamiento de los delitos comunes que son cometidos durante el ejercicio de su mandato son de competencia de la Corte Suprema de Justicia y que para los delitos cometidos antes del mandato es competente el juez penal ordinario. Lo importante de esta reforma y que constituye la diferencia sustantiva de la propuesta de la Comisión de Alto Nivel es al señalamiento específico de los delitos comunes como materia competencial. En la propuesta de la Comisión de Alto Nivel se señalaban solamente “delitos” lo que podía dejar abierta la posibilidad interpretativa de consignar también delitos de función. El matiz no es menor, pues cautela en buena cuenta un espacio mínimo de protección al congresista en el cumplimiento de las atribuciones que le asigna la Constitución, sobre todo en las que se refieren al control político y a la fiscalización de los actos del gobierno. En el contexto de lo esgrimido por nosotros en el párrafo precedente respecto a la necesidad de poner a buen

resguardo el esquema de separación y balance de poderes, creemos que este señalamiento es positivo y puede constituir un punto intermedio entre el riesgo de la mala utilización de la inmunidad parlamentaria y la debilidad del Congreso ante la eventual instauración de gobiernos con vocaciones autoritarias.

CONCLUSIONES

- El comportamiento inadecuado de nuestra clase política, expresada sobre todo a vista del ciudadano en los escándalos permanentes de algunos congresistas y las crisis políticas generadas por estos, ha devenido en una crisis de representación y ello, a su vez, en el cuestionamiento de algunas instituciones que han tutelado nuestra arquitectura constitucional. Una de esas instituciones ha sido la inmunidad parlamentaria.
- Vistas las investigaciones recabadas y analizadas se puede establecer que si bien es cierto en el Reglamento del Congreso se establece que la Inmunidad Parlamentaria aplica una vez que el Congresista asuma el cargo se ha visto que, en la práctica, la comisión encargada del levantamiento durante los últimos años no ha ejecutado esa tarea con diligencia y oportunidad, sino que más bien ha ido transfigurando el sentido de la inmunidad y se ha ejercido de acuerdo a los intereses y acuerdos políticos que la circunstancias lo ameriten, dilatando los plazos y aprovechando los vacíos reglamentarios para otorgar impunidad a los congresistas en casos de evidente contundencia. Por ello, es posible realizar modificaciones al Reglamento del Congreso, para hacer más ágil el procedimiento y consignar plazos preclusivos e indubitables.

- La tradición constitucional peruana señala con toda claridad que la institución de la inmunidad parlamentaria forma parte de su corpus estructural pues, excepto la de 1860, consigna el fuero para el levantamiento de la inmunidad en el propio Congreso.
- Asimismo, se concluye en el estudio de las diversas Constituciones del Perú que estas son reflejo de una constante pugna entre el poder Ejecutivo y el poder Legislativo por la predominancia política. Por lo que la figura de la inmunidad parlamentaria se convertía en una salvaguarda para las decisiones que el Congreso podía adoptar frente a gobiernos de turno que adoptaban una posición dictatorial.
- A la luz del Derecho Comparado y viendo los modelos de Argentina, Brasil, Guatemala, Chile, Colombia, Uruguay, Nicaragua y Venezuela es posible apreciar que, con algunos matices, en el contexto latinoamericano la institución de la inmunidad parlamentaria sigue manteniendo un vigor importante como herramienta garantista para el adecuado equilibrio de poderes.
- Otro hecho resultante de esta investigación es que en los últimos casos de pedido de levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, la evaluación realizada por la comisión encargada del Congreso de la República no fue de la simpatía de la mayoría de ciudadanos; sin embargo, esto no debe ser considerada como una generalización, ni que invalide la finalidad que en sí tiene la inmunidad parlamentaria, pues más allá de ser vista como un privilegio con el que gozan los congresistas, esta tiene que ser entendida como la necesidad de darle garantías a los congresistas para el cumplimiento de las atribuciones que le otorga la Constitución sobre todo las relacionadas con el control político y la fiscalización de los actos del gobierno de turno.
- Se ha podido ver que, a lo largo de la historia, el Poder Judicial ha ido perdiendo espacio en su fuero competencial para juzgar los actos de los otros poderes del Estado, sobre todo desde la desaparición de la institución del Juicio de Residencia.

La reforma propuesta por la Comisión de Alto Nivel y más aún la ley de reforma constitucional recientemente promulgada reivindica ese rol y le da un fuerte margen competencial para levantar el fuero de los congresistas, juzgarlos y eventualmente procesarlos.

- El correcto análisis de la pertinencia de otorgarle a la Corte Suprema competencia para el levantamiento del fuero parlamentario debe hacerse tomando en cuenta no sólo los elementos de la realidad de nuestra historia reciente si no también los hechos acaecidos en la década de los 90 y ampliando lo más posible el espectro de nuestra historia republicana.
- Es importante mantener algunos elementos mínimos de la institución de la inmunidad parlamentaria, pues de ella depende que exista un adecuado balance de poderes y que el Congreso pueda cumplir con sus funciones de control político y representación aún ante la circunstancia eventual de un Poder Ejecutivo con tendencias autoritarias. Estos elementos pueden ser desarrollados en una ley de desarrollo constitucional de la ley recientemente aprobada por el Congreso y promulgada por el Presidente de la República.
- Se puede señalar, por tanto, que la propuesta de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política en lo referido a la inmunidad parlamentaria, resulta pertinente en lo sustantivo: asignarle competencia a la Corte Suprema para levantar el fuero procesal o autorizar la detención del congresista en casos de comisión de delitos y en excluir de este fuero los posibles delitos cometidos antes de su elección. Sin embargo, es importante también dejar a salvo el señalamiento específico de que los posibles delitos cometidos por los congresistas sean delitos comunes para que no se corra el riesgo de que puedan ser confundidos con delitos de función, para cautelar precisamente, el rol del Parlamento en materia de control político y fiscalización, garantizando así, en nuestra arquitectura constitucional, un adecuado balance de poderes.

BIBLIOGRAFÍA

- Asamblea Nacional. (1920). *Constitución Política del Perú de 1920*. Lima.
- Congreso Constituyente . (1867). *Constitución Política del Perú de 1867*. Lima.
- Congreso de la República. (1860). *Constitución Política del Perú de 1860*. Lima.
- Asamblea Constituyente . (1961). *Constitución de la República Bolivariana de Venezuela*. Caracas .
- Asamblea Constituyente de 1978. (1979). *Constitución Política del Perú de 1979*. Lima.
- Asamblea Constituyente de Argentina . (1994). *Constitución de la Nación de Argentina*. Lima.
- Asamblea General de Uruguay. (1967). *Constitución de la República Oriental del Uruguay*. Montevideo.
- Asamblea Nacional . (2015). *Ley N° 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua con Reformas Incorporadas* . Nicaragua : Diario Oficial .
- Asamblea Nacional Constituyente de Colombia. (1991). *Constitución Política de Colombia*. Bogotá: Edit. Corte Constitucional.
- Augusto Medina Otazu. (s.f. de agosto de 2007). *INICIOS DEL CONTROL POLÍTICO PARLAMENTARIO EN EL PERÚ A TRAVÉS DE DOS HECHOS HISTÓRICOS: EL JUICIO DE RESIDENCIA DE RAMÓN CASTILLA Y RUFINO ECHENIQUE*. Recuperado el 13 de octubre de 2019, de Derecho y Cambio Social: <http://www.derechoycambiosocial.com/revista011/control%20politico%20parlamentario.htm>
- Augusto Medina Otazu. (2016). *Liderazgo del Poder Judicial en el Perú: Un breve análisis para recuperar la centralidad en la sociedad del Poder Judicial* . Recuperado el 13 de octubre de 2019, de Pensamiento Penal:

<http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2016/07/doctrina43883.pdf#viewer.action=download>

- Carro Martínez, A. (1986). *La Inmunidad Parlamentaria*. Granda: Tesis Doctoral .
- Comisión de Constitución y Reglamento . (2019). *Informe de Opinión Consultiva respecto de las Causales para el Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria de Arresto*. Lima.
- Congreso Constituyente. (1933). *Constitución Política de Perú de 1933* . Lima .
- Congreso Constituyente de Perú. (1823). *Constitución Política de la República Peruana*. Editorial.
- Congreso Constituyente del Brasil . (1988). *Cosntitución de la República Federativa del Brasil* . Brasilia.
- Congreso Constituyente Democrático . (1993). *Constitución Política del Perú de 1993*. Lima .
- Congreso Constituyente Democrático. (1993). *Constitución Política del Perú de 1993*. Lima .
- Congreso de la República. (1826). *Constitución para la República Peruana*. Lima.
- Congreso de la República. (1828). *Constitución Política de la República Peruana*. Lima.
- Congreso de la República del Perú . (1995). *Reglamento del Congreso de la República* . Lima: Art. 16. .
- Congreso de la República del Perú. (2016). Estatuto Parlamentario: Restricciones y prerrogativas. En Y. R. Alvarado, *Derecho Parlamentario* (págs. 240 - 242). Lima: Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2016-06882.
- Congreso de la República del Perú. (2016). *Reglamento del Congreso de la República*. Lima.
- Congreso General del Perú . (1839). *Constitución Política de la República* . Lima.
- Consejo de Estado y La junta Militar de Gobierno. (1980). *Constitución Política de la República de Chile*. Santiago de Chile: Edit. Jurídica de Chile.
- Constitución de la República de Guatemala. (1993). *Reformulada por Acuerdo Legislativo N° 18-93*. Diario Oficial.
- Constitución de la República de Nicaragua . (1948). Publicada en el Diario Oficial: la Gaceta.
- Constitución Política del Perú . (1993). *Poder Legislativo* . Lima : S.E.

- Convención Nacional. (1834). *Constitución Política de la República Peruana* . Lima.
- Convención Nacional. (1856). *Constitución Política del Perú* . Lima .
- Cordero Molina , S. (2019). *El Poder de las Inmunidades: el problema de las Impunidades en el Ordenamiento Jurídico Costarricense*. Tesis de Grado para optar el título de Licenciado en Derecho, Sede Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica.
- Cueto, F. (2007). Desconfianza política, instituciones y gobernabilidad democrática en la República Dominicana. *Ciencia y Sociedad*, vol. XXXII, núm. 2 , 253.
- DATUM. (10 de mayo de 2018). *Sondeo de opinión sobre la inmunidad de los Congresistas*. Recuperado el 13 de octubre de 2019, de <http://www.datum.com.pe/estudios>
- Durand Vásquez, P. (2018). *Informe de Investigación 2018: La Inmunidad Parlamentaria en la Legislación Comparada*. Congreso de la República del Perú . Lima: Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria.
- Fernán Altuve-Febres. (s.f.). La Constitución de 1823. La Ilusión de una República Ilustrada. *Pensamiento Constitucional Año XI N° 11* , 446.
- Fernandez-Miranda Campoamor, A. (1977). *La inmunidad Parlamentaria en la actualidad* . Revista de Estudios Políticos .
- Gustavo Gutiérrez - Ticse. (08 de setiembre de 2009). *Blog de Gustavo Gutiérrez - Ticse*. Recuperado el 03 de octubre de 2019, de El Antejucio Político en el Perú : <http://blog.pucp.edu.pe/blog/reformajudicial/2009/09/08/el-antejuicio-politico-en-el-peru/>
- Gutiérrez Ticse, G. (2016). *La inmunidad parlamentaria en el Estado democrático constitucional: un estudio a partir del caso peruano*. Lima: Tesis para optar el grado académico de Magíster en Derecho Constitucional.
- José F. Palomino Manchego & Harold Castillo Veintimilla . (2007). El Proceso Competencial: ¿un nuevo recurso procesal para anular sentencias o dejarlas sin efectos? . *Revista Oficial del Poder Judicial* , 203-204.
- Latorre Boza, D. (2008). Inmunidad Parlamentaria. *Derecho & Sociedad* , 163 - 165.
- Meléndez Saénz, J. M. (2012). *La Inmunidad Parlamentaria: Notas características de su real significado* . Lima.
- Paz de Henríquez, N. *Los privilegios Parlamentario en Vennezuela y en el Derecho Comparado*. Universidad de Carabobo.
- Proética. (2019). la Inmunidad Parlamentaria: Breve análisis de esta prerrogativa constitucional. En N. G. Calixtro. Lima.

- Valle-Riestra, J. (2009). *Javier Valle- Riestra: Parlamentario, litigante y defensor de los derechos humanos*. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú.
- Vásquez Ríos, A. (07 de febrero de 2019). *Sobre la Inmunidad Parlamentaria*. Obtenido de Universidad Antonio Ruiz de Montoya : <https://www.uarm.edu.pe/Noticias/facultades/articulo-inmunidad-parlamentaria#.XaUQ-WBKjIV>